

Conflictos socioambientales y formas emergentes de colectivización territorial en una zona costera del sur de Chile

Alejandro Retamal. Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile.

Juan Paredes. Instituto Internacional de Filosofía y Estudios Sociales, Santiago, Chile.

César Pérez. Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.

RESUMEN | Entre las recientes movilizaciones ciudadanas en Chile se observan novedosas formas de agrupamiento social por causas ambientales locales. Este trabajo indaga en tres casos de colectivización emergente en el seno de Reloncaví y sus alrededores (zona costera del sur de Chile), que denuncian la degradación ambiental y social provocada por la salmonicultura industrial y la falta de mecanismos de participación ciudadana. Se analizan aspectos identitarios de tales agrupaciones, sus formas de organización, repertorios de contestación y vinculación territorial, en lo que llamamos *sensibilidades territoriales*. Al no reducirse a la causa, a los intereses compartidos, a los efectos en la institucionalidad o la política pública, estas colectividades presentan diversas fisonomías y escalas de complejidad; pero, por otro lado, su base socioterritorial las dota de una densidad político-cultural para la vida social en el territorio, sin la necesidad de atribuirles la pesada carga de ser un movimiento social.

PALABRAS CLAVE | conflicto social, movimientos sociales, desarrollo sustentable.

ABSTRACT | Among the recent citizen mobilizations in Chile, novel forms of social grouping for local environmental causes are observed. This study investigates three cases of emerging collectivity in the Reloncaví Sound and its surroundings (a coastal zone in southern Chile) that denounce the environmental and social degradation caused by industrial salmon farming, and the lack of mechanisms for citizen participation. Identity aspects, forms of organization, repertoires of contention, and territorial linkage are analyzed, constituting what we call *territorial sensitivities*. These collectivities, not confined solely to the cause, shared interests, or effects on institutions or public policy, exhibit various forms and scales of complexity. On the other hand, their socio-territorial basis endows them with a political-cultural density for social life in the territory, without needing to attribute to them the heavy burden of being a social movement.

KEYWORDS | social conflict, social movements, sustainable development.

Recibido el 13 de junio de 2024, aprobado el 2 de agosto de 2024.

E-mails: nelson.retamal@ulagos.cl | paredesjp@gmail.com | cesar.perez@ulagos.cl

Introducción

A lo largo de la última década, ha aumentado en Chile la protesta ciudadana vinculada a problemáticas territoriales (Delamaza, 2019; Fernández, 2018), principalmente en reacción a las externalidades negativas de ciertas actividades extractivistas (minería, acuicultura, agroindustria, entre otras). En general, estas manifestaciones dan cuenta de las visiones contrapuestas en torno al acceso a los espacios públicos y/o recursos de uso común (Fernández, 2018; Svampa, 2019). Conflictividades de esa índole también se observan en las zonas costeras del sur de Chile, en denuncia del efecto acumulativo que ejerce principalmente la salmonicultura sobre el medioambiente costero (Retamal & Pérez, 2021).

A partir de algunos casos de conflictos socioambientales en las costas del sur del país, este artículo analiza formas de colectivización emergente de actores y comunidades locales del seno de Reloncaví y sus alrededores (Región de Los Lagos, Chile), enfatizando en sus causas, formas de actuación y discurso, organización y alianzas. Junto con lo anterior, destacamos la emergencia de un nivel diferente de análisis en las actuaciones colectivas al interior de los conflictos socioambientales tratados, relacionada con la configuración de *sensibilidades territoriales*.

Para lo anterior, se efectuó un registro de los episodios ambientales ocurridos en el seno de Reloncaví y su entorno cercano desde los meses posteriores a la revuelta social en Chile (fines de 2019) hasta mediados de 2022, entre los que destacan escapes y mortandad de salmones, hundimientos de infraestructura industrial, contaminación de astilleros, instalación de pisciculturas, vertimiento de residuos contaminantes (petróleo, alimento de salmón), junto a otros. En su mayoría los casos están relacionados con la industria del salmón, y constituyen un factor preponderante en las distintas controversias acaecidas en las costas australes del país.

Al menos tres de estos episodios pueden ser catalogados como conflictos socioambientales, ya que implican: a) una disputa por el acceso y control de bienes públicos naturales, b) donde los actores enfrentados presentan intereses y valores divergentes con relación a su uso, c) en un contexto de notoria asimetría de poder (Svampa, 2019). Los casos que cumplen con tales rasgos son: “Unión por la Defensa de las Aguas y las Tierras de Codihué”, “Carretera Austral Sin Salmoneras” y “Huelmo Sin Salmoneras”. Cada uno será analizado según las siguientes dimensiones: identidad colectiva, formas de organización, repertorios de acción, y sensibilidades territoriales.

Las investigaciones recientes sobre los conflictos socioambientales en Chile revelan que los principales actores de las protestas y movilizaciones están compuestos por comunidades locales, movimientos indígenas y organizaciones ambientalistas. Estos grupos se movilizan en defensa de sus territorios, recursos naturales y derechos sociales en un contexto donde la expansión de proyectos extractivistas, como la minería y las hidroeléctricas, afecta tanto sus medios de vida como su entorno. Esta situación se agrava por la falta de procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el entorno (Allain, 2019; García, 2021). Por tanto, se destaca que los conflictos señalados no son meras reacciones a la degradación ambiental,

sino que están profundamente ligados a cuestiones de identidad, cultura, género y derechos humanos (Arriagada et al., 2022; Maillet et al., 2021).

De manera más específica, los estudios en este campo analizan las dinámicas internas y las estrategias políticas empleadas por las organizaciones y comunidades en la conflictividad ambiental, así como su tránsito desde la movilización social a la participación institucional. Un ejemplo de ello es el estudio de Carrasco et al. (2022), que examina las estrategias adoptadas por organizaciones socioambientales para influir en el proceso constituyente. Otras investigaciones se centran en los impactos políticos y sociales de las movilizaciones en contra de las actividades extractivistas. A pesar de que estas acciones han logrado visibilizar sus demandas en la agenda pública, las respuestas del sistema político son a menudo restringidas, resultando en cambios limitados en las políticas públicas, salvo algunas excepciones que han conseguido modificaciones legislativas (Cortez López, 2019; Delamaza et al., 2023; Maillet et al., 2021).

Así, los análisis sobre conflictos socioambientales en Chile se enfocan en los actores movilizados y en el impacto que sus demandas tienen en la institucionalidad. Al respecto, los principales desafíos que enfrentan estas demandas ambientales incluyen la falta de reconocimiento y legitimidad dentro de la estructura política formal, especialmente debido a la resistencia de sectores económicos y políticos que priorizan el desarrollo extractivista (Carrasco et al., 2022). Asimismo, la fragmentación y la diversidad de visiones y enfoques dentro del movimiento ambiental pueden debilitar la capacidad de las organizaciones que lo integran para articular sus demandas de manera coherente y efectiva ante las instituciones (Carrasco et al., 2022; Delamaza et al., 2023).

En este marco, la investigación propuesta aquí pretende contribuir al estudio de las acciones colectivas y los conflictos socioambientales en torno a los cuales se articulan. Para ello, nos situamos en un diálogo entre las teorías de los movimientos y movilizaciones sociales, resaltando sus dimensiones culturales (Jasper, 2016; Melucci, 1999; Paredes, 2013; Polletta & Jasper, 2001). Si bien, en términos analíticos, se emplean algunas categorías tradicionales para analizar la acción colectiva desde los movimientos sociales, la relevancia está dada en los significados que emergen de estas movilizaciones, en particular en relación con las sensibilidades territoriales. Esto permite entender cómo la resistencia a proyectos extractivistas genera fragmentación en el tejido social, dada la coexistencia de detractores de estas iniciativas y de comunidades que las apoyan.

Estado del arte

En el amplio espectro de fenómenos políticos colectivos, existen cuatro perspectivas clave: a) teorías de movimientos y movilizaciones sociales, centradas en la acción colectiva; b) teorías de organización y grupos, que estudian la organización de los manifestantes y las grupalidades; c) análisis de los efectos de la movilización y la acción de grupos en la institucionalidad y la agenda pública; y d) enfoques sobre el impacto en la subjetividad individual y colectiva, que exploran las militancias y activismos.

De estas perspectivas, dos destacan en este análisis. Primero, la que examina cómo los modos de organización colectiva, vinculados al enfoque de coaliciones promotoras, impactan en la institucionalidad (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999; Sabatier & Weible, 2007, 2010). Segundo, las perspectivas sobre movimientos y movilizaciones sociales, que se concentran en los repertorios culturales de la acción pública y la identidad colectiva (Melucci, 1999; Polletta & Jasper, 2001; Tarrow, 2004; Tilly, 2006).

El enfoque de coaliciones promotoras se interesa especialmente en el proceso de toma de decisiones en torno a la formulación de políticas públicas (Flores-Mariscal, 2021), donde actores diversos convergen en una arena pública en la que cooperan y confrontan sus posiciones. En este espacio sociopolítico, o subsistema de políticas públicas, los actores forman coaliciones promotoras, grupos que comparten creencias y buscan influir en políticas públicas relacionadas con un problema de interés (Guajardo & Gil-García, 2020). Dichas coaliciones operan en función de una racionalidad limitada (Flores-Mariscal, 2021) y están sujetas a un proceso de aprendizaje (Flores-Mariscal, 2021; Sanjurjo, 2013) que modifica sus sistemas de creencias para alcanzar sus objetivos con mayor eficacia. Entre sus recursos, las coaliciones cuentan con influencia directa sobre autoridades, movilización de la opinión pública, uso estratégico de información para moldear la agenda pública, y apoyo financiero y de liderazgo (Benavides-Lara, 2020).

A diferencia de otras formas de organización más estáticas, las coaliciones promotoras son flexibles y dinámicas, adaptándose a las circunstancias cambiantes a lo largo del proceso político (Benavides-Lara, 2020; Cortez & Maillet, 2018). Este enfoque, como señalan Cortez y Maillet (2018), intenta superar los límites de las teorías de movimientos sociales, que no siempre se orientan a construir agenda política o a convertirse en interlocutores formales para los tomadores de decisiones (Bebbington, 2007). Además, esta perspectiva permite analizar los conflictos socioambientales desde un punto de vista político-institucional, en el que dichos conflictos pueden escalar desde problemas locales hacia la agenda nacional y, eventualmente, convertirse en políticas públicas (Cortez & Maillet, 2018). Hay, sin embargo, una limitación en ella, y es que no siempre considera los procesos internos de colectivización, que incluyen aspectos identitarios y culturales, y que no se reducen a sus efectos en políticas públicas.

En cuanto al estudio de movimientos y movilizaciones, la perspectiva señalada abarca un espacio interdisciplinario que incluye la sociología, la antropología, la geografía y los estudios culturales (Álvarez et al., 2001; Neveu, 2002; Porto Gonçalves, 2001). Su análisis involucra la identidad colectiva, los repertorios de movilización y los marcos organizativos y reivindicativos. Una forma de organizar esta complejidad es privilegiar un enfoque analítico que permita vincular distintos niveles (Jasper, 2016; Paredes, 2013), relacionando las aproximaciones dentro del campo de estudio. Una distinción útil es entre movimientos orientados a la estrategia y movimientos orientados a la identidad (Cohen, 1985).

La perspectiva estratégica pone el énfasis en la organización colectiva, la formulación de causas y la definición de recursos, lo cual constituye el enfoque de movilización de recursos (McCarthy & Zald, 1977). No obstante, una crítica a este

enfoque es que suele desatender el papel de la institucionalidad en la movilización. La perspectiva del proceso político (Tarrow, 2004) complementa esta visión al incluir la noción de *oportunidades políticas*, tanto estructurales como contextuales, que pueden facilitar o dificultar el éxito de una movilización.

Por otro lado, la perspectiva identitaria explora la manera en que se crean las identidades colectivas en el contexto de sociedades en transformación, donde la acción colectiva se construye mediante la identificación y el compromiso con una causa común. Melucci (1999) se interesa en estudiar cómo, en sociedades complejas, los actores colectivos acceden desigualmente a bienes y recursos comunicacionales, creando una identidad colectiva que integra tanto objetivos compartidos como compromisos emocionales. Así, la identidad colectiva no es un punto de partida, sino un proceso construido en la movilización, que incluye metas, compromisos y valores compartidos (Melucci, 1999; Polletta & Jasper, 2001).

Proponemos, por nuestra parte, un concepto amplio de cultura (Paredes, 2013, 2021), en tanto ámbito asociado a la producción práctica y enunciativa de significados y símbolos colectivos. A partir de tal propuesta, nuestro objetivo es rescatar las dimensiones identitarias y estratégicas de los movimientos sociales que constituyen el foco de este estudio. Abordamos tales dimensiones tanto en cuanto ámbito interno del proceso de movilización social, como en los alcances para la institucionalidad de las demandas y reclamos que realiza el actor colectivo a partir de una definición particular de un problema de alcance público (Paredes & Cáceres, 2023). Por ende, planteamos una definición compleja de actor colectivo que no puede asociarse del todo a la identidad de movimiento social, ni limitarse a la disputa externa por una política pública, como lo hace el enfoque de coaliciones promotoras.

Formulamos así la categoría de *modos de colectivización emergentes* para designar ese espacio procesual e intermedio en que se configuran formas incipientes de acción colectiva que intentan vincular la dimensión interna (organizacional e identitaria) y externa (repertorios, demandas y públicos) de la acción pública de un actor colectivo, a través de los siguientes aspectos:

- a. *Identificación colectiva*, definida por un doble vínculo procesual, tanto afirmativo hacia el colectivo y su causa, mediante la elaboración de creencias y objetivos compartidos entre sus miembros y simpatizantes, como negativo, definido por su carácter oposicional con otros actores.
- b. *Modos de organización* flexibles y adaptativos a la contingencia, caracterizados por mecanismos de jerarquía modular y variable, que combinan formas de decisión jerárquica con un carácter deliberativo, asambleario y horizontal, diferenciándose de modalidades centralizadas y rígidas.
- c. *Capacidad de acción colectiva* de alcance público, entendida tanto como repertorios contenciosos de protesta, así como formas de acción colaborativa que refuerza los lazos internos y permite establecer vínculos con otras demandas y grupos.
- d. Formas alternativas de *sensibilidad territorial*, entendida como la producción colectiva de sentimientos, emociones, valoraciones, creencias incipientes e

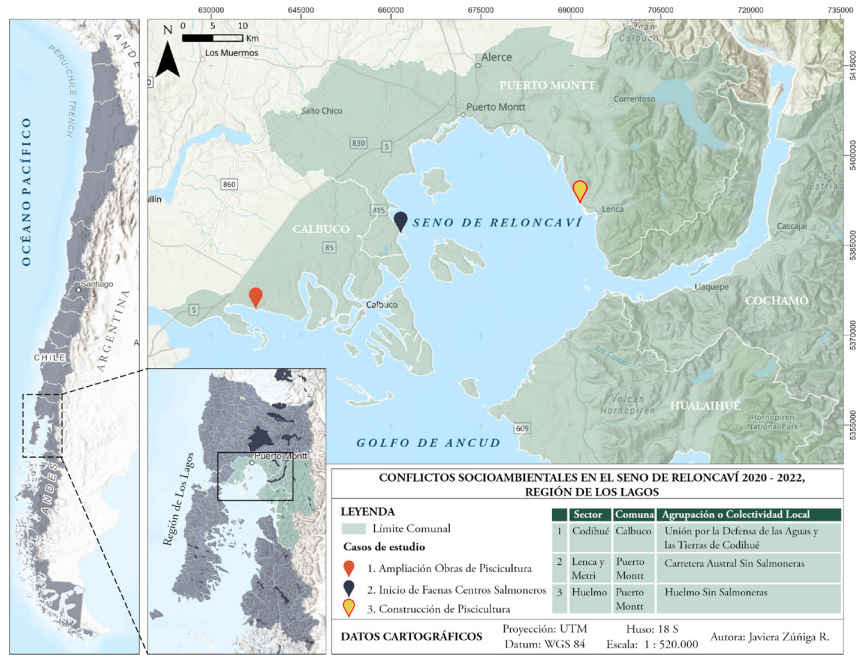
imágenes tenues en torno al devenir del territorio y al conflicto que les atañe, sin necesariamente definir un proyecto, plan ideal o conciencia acabada en torno al mismo, lo que la distingue de la ideología. Remite a formas embrionarias, en formación y despliegue –por ende, abiertas y no cerradas– de diversidad de experiencias y horizontes de expectativas e ideales, irreducibles a su instrumentalización, con relación al valor de la vida colectiva territorial en el conflicto.

Material y método

Esta investigación se condujo bajo un enfoque cualitativo que combina estudio de caso y observación etnográfica (Canales, 2006; Valles, 1997; Vasilachis de Gialdino, 2013). Con esta ruta metodológica nos acercamos a los esquemas de representación de los sujetos y colectivos investigados, con la finalidad de analizar y comprender el orden de los significados y sus reglas de significación (Canales, 2006).

La investigación toma como área de estudio al sistema socioecológico del seno de Reloncaví y sus inmediaciones, Región de Los Lagos (Figura 1). Es en este lugar donde se desarrollan los tres casos de conflictos socioambientales analizados en la investigación, los cuales comparten algunas situaciones de origen y estrategias de acción, pero también otras características que los diferencian.

FIGURA 1 | Ubicación de los casos de estudio



FUENTE: ELABORADO POR JAVIERA ZÚÑIGA R., GEÓGRAFA.

La estrategia de obtención de información incluyó las siguientes técnicas:

- a. *Registro etnográfico*: observaciones y conversaciones durante el trabajo de campo en cada sector y en las acciones colectivas organizadas por cada agrupación o movimiento (encuentros familiares, marchas, ferias, reuniones abiertas a la comunidad). Esta información fue sistematizada en una ficha de caracterización de cada conflicto.
- b. *Revisión documental*: análisis de documentos producidos por las agrupaciones en conflicto (comunicados, informes técnicos, etc.), sus publicaciones en redes sociales (Facebook e Instagram) y fuentes secundarias, tales como bases de datos de la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio del Medio Ambiente.
- c. *Entrevistas en profundidad*: realizadas a representantes de las colectividades territoriales, mediante consentimientos informados validados por un Comité Ético Científico.

Los instrumentos cualitativos se organizaron en función de las dimensiones de análisis de los conflictos y sus respectivas preguntas orientadoras (Tabla 1).

TABLA 1 | Dimensiones de análisis y preguntas orientadoras

DIMENSIONES	PREGUNTAS ORIENTADORAS
Identificación colectiva	¿Qué es lo que los une?
	¿Cuáles son sus principales demandas?
	¿Contra quiénes van dirigidas sus acciones?
Modos de organización	¿De qué manera se organizan internamente?
	¿Cómo toman decisiones?
	¿Quiénes les han brindado apoyo?
Acción colectiva	¿Cuáles han sido sus principales acciones/repertorios?
	¿Cómo los implementan?
	¿Qué mensaje transmiten en estas acciones?
Sensibilidades territoriales	¿Cuáles son los horizontes de la movilización?
	¿Qué valor e importancia tiene el territorio?
	¿Qué imágenes y sensaciones evoca la defensa del territorio?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

La información se sistematizó y analizó utilizando el modelo de *análisis interpretativo del discurso* (Canales, 2006; Valles, 1997). Con apoyo del programa Atlas.ti 7 se efectuó codificación deductiva e inductiva, selección de citas ilustrativas y reducción descriptiva de la información por dimensión y actores, con el propósito de deshacer la singularidad de los discursos y unificar los sentidos narrativos de los entrevistados (Canales, 2006; Flores, 2013; Valles, 1997).

Resultados

Los casos de estudio se desarrollan entre los años 2020 al 2022 en el seno de Reloncaví y su entorno cercano. Se caracterizan por la presencia de conflictos entre sujetos y colectivos ciudadanos, por una parte, y empresas de salmonicultura, por otra, en circunstancias en que los proyectos cuestionados han sido aprobados mediante Declaración de Impacto Ambiental y, por ende, la participación ciudadana se reduce al nivel informativo (Tabla 2).

TABLA 2 | Características de los proyectos en conflicto

PROYECTO	TITULAR	OBJETIVO	INVERSIÓN ESTIMADA	VIDA ÚTIL	FORMA DE PRESEN-TACIÓN	ESTADO ACTUAL (RCA / FECHA)
Ampliación Piscicultura de Recir-culación Aucha	Invermar S.A.	Producción de 3.210 toneladas anuales de smolt. El crecimiento de los peces se reali-zará en estanques provistos cada uno con un sistema de recirculación individual de aguas (I-RAS).	USD 24.000.000	50 años	Declara-ción de Impacto Ambien-tal (DIA)	Aprobado.
						Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 202410001185
						30-sept-2024
Centro de Cultivo de Salmónidos Sector Oeste Ba-hía Lenca Pert N° 204101210	Salmones Pacific Star S.A.	El proyecto con-templa la construc-ción e instalación de trenes de balsas jaulas en los que se ejecutará la fase de engorda en agua de mar.	USD 1.500.000	Inde-finida	Declara-ción de Impacto Ambien-tal (DIA)	Aprobado.
						Resolución de Calificación Am-biental (RCA) 140
						24-feb-2010
Piscicultura de Recir-culación Biotecnoló-gica Punta Capacho	Novofish S.A.	Producción de 1.560 tonela-das anuales de salmónidos. Para ello, se construirá una Piscicultura que cumpla la nor-mativa ambiental vigente.	USD 18.000.000	50 años	Declara-ción de Impacto Ambien-tal (DIA)	Aprobado.
						Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 20231000119
						06-mar-2023

FUENTE: SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), GOBIERNO DE CHILE.

Si bien comparten elementos en común, cada uno de los conflictos tiene sus parti-cularidades de origen y desarrollo, que se presentan a continuación.

Caso 1: Codihué. A fines de 2021, un grupo de vecinos del sector de Colaco (Aucha), comuna de Calbuco, se manifestó en oposición a la ampliación de una piscicultura de recirculación de la empresa Invermar. Con esta obra se ampliaría la producción de salmones de 660 toneladas (según Resolución de Calificación Ambiental N° 049 del 06/02/2017) a 3.200 toneladas. Estos pobladores comenzaron

a reunirse “espontáneamente”, al darse cuenta del traslado masivo de materiales en el borde costero; luego, al compartir información y experiencias, conformaron la Unión por la Defensa de las Aguas y las Tierras de Codihué.

Caso 2: Lenca y Metri. Este conflicto se desarrolló con fuerza entre el segundo semestre del año 2021 y los primeros meses de 2022, en las localidades costeras de Lenca y Metri, ubicadas en el primer tramo de la Carretera Austral de la comuna de Puerto Montt. En esta zona se denunció la instalación de tres centros de producción salmonera de dos empresas distintas (Salmones Austral y Marine Farm), dentro de una concesión de acuicultura que, habiendo sido otorgada en 2011, habría entrado en caducidad por no presentar operaciones en el plazo estipulado por la ley. Una organización de base territorial, el Comité Biocultural y Ambiental de Lenca, pasó a convocar y movilizar a otros grupos, gestando una red de organizaciones denominada Carretera Austral Sin Salmoneras, que con intensa actividad se manifestó en contra del modelo de desarrollo regional basado en la salmonicultura.

Caso 3: Huelmo. En este caso, la comunidad local rechazó la instalación de una piscicultura de la empresa Novofish en el sector de Huelmo (Punta Capacho). En marzo de 2019, la empresa presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para la instalación de una segunda piscicultura en el sector (la primera funciona desde 2009) con tecnología de recirculación biotecnológica. En mayo del mismo año, el proyecto fue descartado por insuficiencias en la información y falta de participación ciudadana. En abril de 2021, Novofish volvió a presentar su proyecto ante el SEA y ha solicitado, a la fecha, tres suspensiones de plazos para reunir antecedentes y obtener el consenso de la comunidad.

Identificación colectiva

El surgimiento de estos conflictos está asociado a un cierto elemento de novedad que perciben los habitantes locales en sus territorios, donde un grupo de ellos comienza a compartir sus impresiones en espacios de encuentro cotidianos, primero; y en un segundo término, en espacios de organización propios: reuniones de juntas de vecinos, o bien reuniones convocadas específicamente para abordar el asunto con miras a emprender una acción.

En Codihué, señala una vecina, “vi que se empezaron a hacer cosas, a avanzar en una construcción gigante, y vi que había cosas que me parecía que no estaban bien” (FCE-AOI). De esta manera, se enteraron de las obras de ampliación, descubriendo que no contaban con los permisos correspondientes.

Entonces nos empezamos a dar cuenta de que había mucha más gente que estaba viendo lo mismo y que les parecía extraño todo esto. Así fue como nos reunimos... y partimos con esto. Empezamos a molestar hartos, [primero] hicimos una limpieza de playa que yo creo que ahí fue que más nos fuimos agrupando. (FCE-AOI)

La organización de la limpieza de playa fue una forma de sumar adhesión y generar interés en la problemática que provocaba la piscicultura, siendo ese uno de los primeros pasos hacia una identificación colectiva. A fines de 2021, los residentes decidieron crear el colectivo territorial Unión por la Defensa de las Aguas y las Tierras de Codihué, a fin de canalizar su descontento con las consecuencias

socioambientales negativas para el territorio, sobre todo por el aumento de la carga ambiental a consecuencia de la duplicación del ducto de evacuación (de 51 litros se pasó a 95).

El caso de Huelmo es similar, en el sentido de que se inició cuando socios de una junta de vecinos advirtieron la instalación de obras de una piscicultura. Utilizando como plataforma dicha organización, comenzaron a reunirse para compartir su descontento y definir ciertos objetivos concretos: lograr la realización de un proceso de participación ciudadana, apelando para ello a la aplicación de la normativa ambiental.

En cuanto a Metri y Lenca, en julio de 2021 comenzaron a circular por redes sociales noticias y comentarios sobre el reinicio de faenas salmoneras en 24 jaulas ubicadas en el espacio marítimo local. Alarmado por esta situación, el Comité Biocultural y Ambiental de Lenca convocó a una primera reunión, a la que asistieron personas y organizaciones de base de todo el tramo de la Carretera Austral que va desde Puerto Montt a Caleta La Arena. El propósito era reunir antecedentes y definir acciones para contrarrestar el funcionamiento de las salmoneras, aduciendo para ello la caducidad de la concesión y la falta de información a la comunidad respecto del reinicio de estas operaciones. Así nació el movimiento Carretera Austral Sin Salmoneras, como un espacio organizativo más amplio y diverso, con el objetivo de proteger y recuperar la biodiversidad de la zona costera y su patrimonio cultural, asociado a corrales de pesca, cementerio hundido, bosques fósiles, entre otros.

En los tres casos se observa cómo los actores locales organizados adscriben a un ideario de dos vectores: el activismo medioambiental, y el arraigo o apego territorial local. Evidencia de ello es que hay un punto en que las instancias organizacionales ya existentes son excedidas por el objetivo de oposición a los proyectos de inversión y se vuelve necesario generar orgánicas nuevas. A partir de esto, se plantean en actitud de “defensa” y, por lo tanto, en situación antagónica al actor empresarial. Si bien este actor comprende empresas específicas e individualizadas (Invermar en Codihué, Salmones Austral y Marine Farm en Lenca y Metri, Novofish en Huelmo), también se reconoce en ellas prácticas comunes que las constituyen como un actor en bloque al cual oponerse en su conjunto. Así lo manifestó públicamente una vocera de Carretera Austral Sin Salmoneras en un festival realizado en Lenca en agosto de 2021, al señalar las motivaciones de su lucha:

Nos hemos unido en esta causa cuando nos vimos invadidos por esta empresa en nuestras playas... Entonces nos unimos, los vecinos de toda la Carretera Austral, porque no es la primera vez que nos vemos entrampados en este sistema. Estamos cansados que las empresas no cumplan con los procesos de mitigación y más encima invaden, nos irrumpen y hacen la destrucción que hoy en día estamos viendo... (Alocución 1, vocera del Movimiento)

Esta cita permite reconocer causas y motivos que fundan el nacimiento del nuevo colectivo, además de definir como antagonistas no solo a las empresas referidas, sino al conjunto de la industria salmonícola, aludiendo a una serie de crisis ambientales ocurridas en la zona entre 2020 y 2021: escape de salmones, hundimiento de la infraestructura de centros de cultivo, mortandad de salmones y derrame de petróleo.

En las empresas comentadas (y en la industria salmonícola en general) se reconoce una obstinación por instalar sus proyectos mediante una variedad de métodos considerados ilegítimos por la población. Por ejemplo, los vecinos organizados de Codihué acusan, en un informe de elaboración colectiva, una serie de irregularidades, desde modificaciones al proyecto original y la asignación de la concesión marítima en superposición de área con un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), hasta la omisión de antecedentes acerca de la existencia en la zona de influencia de la piscicultura de la isla Kaikué-Lagartija, declarada Santuario de la Naturaleza en 2017.

Otra clase de actuar empresarial ilegítimo es, en palabras de una vecina de Codihué, la “*estrategia de conquista*”, asociada a la difusión comunicacional de los beneficios del proyecto, como –por ejemplo– la generación de empleo y utilización de tecnología respetuosa con el medioambiente. Además, se señala, las industrias en referencia se acercan a las organizaciones locales y escuelas para entregar donaciones y ofrecer apoyo al desarrollo territorial (es el caso de la financiación de mejoras del sistema de Agua Potable Rural [APR] local en Lenca y Metri). La misma vecina señala: “Son profesionales en todo lo que es relacionamiento comunitario... tienen un manual de actuación respecto de la comunidad” (FCE-AO2). Estas estrategias de la empresa han generado tensiones en la comunidad local, y el “discurso del odio y del miedo” ha llegado a un punto tal que algunos integrantes de la agrupación han sido culpados de los supuestos despidos que causó la paralización de las obras.

Las consecuencias son las que estamos viviendo ahora: que estamos siendo enjuiciados por nuestros vecinos, que nos culpen de que se van a quedar sin empleo por nosotros, porque eso es lo que la empresa les hace entender... y ponen a todos en contra. (FCE-AOI)

Similares prácticas denuncia la asociación Carretera Austral Sin Salmoneras, acusando públicamente a Salmones Austral de intentar dividir a la población local y de instalar procesos espurios de participación y consulta ciudadana. Esto último se relaciona con la táctica empresarial de fragmentar ficticiamente sus proyectos, tomando ventaja de las debilidades del proceso de evaluación ambiental. Al subdividirlos en proyectos de menor escala, apelan a la realización de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), mientras que el considerarlos en conjunto haría exigible una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), obligando a abrir un proceso de participación ciudadana (PAC), que tiene mayores garantías para la efectiva consulta y participación de las comunidades locales.

Así, las prácticas de relacionamiento comunitario, amparadas bajo el paradigma de la responsabilidad social empresarial no solo secuestran la participación, sino que también son un obstáculo para los procesos de identificación que sostienen los actores locales, quienes buscan sumar el apoyo de sus pares y motivar la acción colaborativa.

Modos de organización

Una vez que la contingencia del encuentro de las organizaciones comunitarias con las empresas salmonícolas ha motivado la constitución de nuevas plataformas de “defensa del territorio”, estas adoptan estructuras diversas según su trayectoria

de surgimiento y su percepción de necesidades organizacionales para viabilizar la oposición activa.

Como ya se señaló, un aliciente para la conformación de nuevas orgánicas es que los nuevos objetivos de “defensa” territorial exceden los fines de las organizaciones de base originales, y esto implica que también se produce una recomposición de miembros con identidades y adscripciones diversas. Este rasgo es común a los tres casos en estudio.

La Unión por la Defensa de las Aguas y las Tierras de Codihué es una organización formal, con personalidad jurídica propia. La compone una treintena de socios de perfiles variados, incluyendo habitantes históricos de la zona (indígenas, pescadores, campesinos, etc.) y otros vecinos más recientes, muchos de ellos profesionales. También recibe apoyo de otras organizaciones locales, como la junta de vecinos y comunidades indígenas.

Carretera Austral Sin Salmoneras, por su parte, es una plataforma organizacional que actúa como una coordinadora de agrupaciones territoriales y de vecinos del sector, con el propósito de emplazar públicamente a las autoridades y a las empresas que estaban involucradas en este conflicto. En los meses más álgidos de reclamación, llegaron a tener más de 200 participantes individuales y colectivos. Si bien el movimiento no contaba con personalidad jurídica, era liderado por el Comité Biocultural y Ambiental de Lenca.

Huelmo Sin Salmoneras es un espacio organizativo que actúa por medio de la junta de vecinos local. Al ser la única organización formal existente en el sector, ha sido fundamental para canalizar las denuncias y convocar a las actividades del grupo. Están en proceso de conformar una agrupación con personalidad jurídica, usando la figura de comité de defensa del borde costero ante este conflicto y otros que puedan alterar el ecosistema del lugar. Si bien hay interés en la población del sector, creen que los integrantes de esa organización todavía no llegan de manera contundente a la gente, debido a que muchos se preocupan del día a día y no tienen una conciencia ambiental de largo plazo. Por su parte, en Huelmo Sin Salmoneras están conscientes de que les falta darse a conocer a la comunidad y lograr un mayor grado de organización interna: “Nos falta más visibilizar esto, organizarnos un poco más todavía” (FCE-COI).

Los modos de organizarse internamente varían según la complejidad de la toma de decisiones, relacionada con cómo adecuarse al ritmo del conflicto y los recursos (tiempo, principalmente) que se emplean en ello. Si bien todos los casos comparten un principio de horizontalidad entre los miembros, incluso de democracia directa o asambleísmo, su forma de llevarlo a la práctica varía, siendo frecuente la conformación de comités y grupos de coordinación.

La forma de organización de Huelmo Sin Salmoneras es la más liviana: se definen como un grupo de vecinos del sector liderados por un grupo de ellos mismos y que se organizan por medio de WhatsApp y de reuniones con asesores externos (profesionales y políticos).

En Codihué, un grupo de coordinación se encarga de articular y trabajar más directamente en la causa que los moviliza. Se destaca su legitimidad interna, señalándose al respecto que “es un grupo muy sólido y de mucho respeto”. Para la

coordinación interna emplean WhatsApp y correo electrónico. Además, realizan asambleas internas, reuniones del grupo de coordinación y otras con asesores externos. Las tareas se distribuyen entre tres comités de trabajo, referidas a los ámbitos judicial, técnico y de educación ambiental. Esta última área apuesta a “generar conductas saludables en la población en relación con el medioambiente, el entorno privilegiado que tenemos para vivir” (FCE-AO2), como acción comunitaria de largo plazo. La información se comparte a todos los integrantes y, si bien un grupo de coordinación lidera el proceso de toma de decisiones, estas solo se ejecutan previo el consenso de la mayoría de los socios.

La organización de Carretera Austral Sin Salmoneras, en tanto, es más compleja, debido a su escala. En su interior se conformó un grupo de coordinación integrado por siete representantes de organizaciones cercanas al espacio en conflicto. Este grupo coordinador dividía su trabajo entre tres comisiones: comunicacional, legal y medioambiental. Cada comisión estaba integrada por dos representantes del grupo coordinador, aunque la representante del Comité Biocultural podía tener participación transversal en los grupos de trabajo. La toma de decisiones y manejo de información adoptó un cierto carácter jerárquico. Si bien existía una comunicación fluida con los participantes, la decisión final de las acciones emprendidas por el movimiento siempre dependía del grupo coordinador y, en muchos casos, de la agrupación que encabezaba estas movilizaciones. Según una integrante del grupo coordinador, esto debía ser así por el carácter multitudinario del movimiento y por la importancia de actuar rápido ante la contingencia.

Es importante señalar que, a pesar de compartir el fondo de la reclamación, algunos no estaban de acuerdo con la forma de organización y funcionamiento del movimiento. Se señala que “existía un grupo que se creía dueño del movimiento y controlaba la información y las acciones que se deberían hacer” (FCE-BO1). Esto causó molestia en otras organizaciones asociadas al movimiento, al no sentirse consideradas. Es más, declaran que siempre les llamó la atención la forma “poco democrática” de elegir a los integrantes del grupo de coordinación, pero mayor molestia generó el hecho de que toda acción debía pasar por la aprobación de los encargados del movimiento.

[...] hubo algunos conflictos, porque hicimos algunas actividades con el nombre de Carretera Austral Sin Salmoneras, que generó algunas adversidades, y nos pidieron que les cambiemos el nombre porque no lo organizaban ellos, así que desde un principio... supone que ellos eran los dueños del movimiento. Entonces, si había algo que nosotros hacíamos, tenía que ser con ellos o solo por nuestra parte. (FCE-BO1)

Las constantes disputas con otras organizaciones participantes, así como al interior del grupo coordinador, desgastaron progresivamente el movimiento, hasta que Carretera Austral Sin Salmoneras terminó disolviéndose hacia marzo de 2022.

En el proceso de conformación de todos estos grupos, sus miembros reconocen un elemento de ensayo y aprendizaje organizacional. En Codihué, hablan de un aprendizaje “sobre la marcha”:

Yo creo que ninguno tenía idea de temas medioambientales ni mucho menos de este tipo. Yo tampoco nunca me había relacionado con estos temas, así que ha sido un proceso de crecimiento conjunto de ir aprendiendo lo que hay que hacer. (FCE-AO2)

Esto explica en parte que la organización, como sucede con los procesos de identificación en curso, no esté exenta de tensiones internas.

Acción colectiva

Los grupos despliegan un repertorio amplio de acciones para el logro de sus propósitos, dirigiéndose a diferentes actores que conforman la arena de conflicto socioambiental: residentes locales, entidades públicas y empresas.

Partiendo por el objetivo más contingente de detener la instalación de las empresas en el territorio, se recurre a procedimientos administrativos o judiciales que obliguen a paralizar las obras. Se hace especialmente importante para estos grupos instar a la autoridad ambiental (Servicio de Evaluación Ambiental) a que, en el proceso de evaluación de los proyectos de inversión, se obligue a las empresas a desplegar un proceso de participación ciudadana (PAC) acorde a una EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), de mayor complejidad y con más garantías que una DIA (Declaración de Impacto Ambiental), que está pensada para proyectos de menor escala y que no exigen PAC.

Gran parte de esta lucha, considerada de carácter práctico, implica sumergirse en el mundo de la burocracia, desafío que los grupos abordan de dos maneras simultáneas. Una tiene que ver con acopiar y generar información sobre los procedimientos administrativos y judiciales, y sobre aspectos técnicos de los proyectos de inversión. En Codihué, la agrupación elaboró y difundió un informe que detallaba las irregularidades del proyecto. De manera similar, en los otros casos, la información sobre el proyecto se ha difundido a través de medios digitales (WhatsApp, Facebook, Instagram) a modo de denuncia pública y para generar conciencia entre los propios residentes.

Relacionado con lo anterior, se recurre a alianzas con al menos dos clases de actores: los que poseen conocimientos técnicos, y aquellos que poseen capital político, todo ello con el propósito de empujar su lucha por frenar el avance de las empresas. De este modo, las organizaciones territoriales se reúnen con académicos asesores, profesionales de diversas disciplinas, organizaciones de orientación ambientalista y políticos. En Codihué, sin embargo, son enfáticos en señalar que son estratégicos a la hora de dialogar con políticos: su propósito es aprovechar sus capacidades de injerencia, independientemente de su adscripción partidaria.

Desde Carretera Austral Sin Salmoneras destacan la alianza tanto con la ONG Greenpeace como con el movimiento ciudadano Defendamos Chiloé, así como con profesionales independientes y concejales. Con su apoyo, a principios de agosto de 2021, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt admitió el recurso de protección interpuesto por los abogados de Greenpeace para paralizar la instalación de la empresa Salmones Austral en las bahías de Lenca y Metri, aunque eventualmente esta acción judicial no prosperó. También se destaca que, a solicitud del movimiento ciudadano, a fines de julio de 2021, la Superintendencia del Medio Ambiente y la

Armada visitaron en terreno la situación denunciada, constatóndose diversos daños medioambientales: destrucción de la zona intermareal y del humedal de marisma con vehículos y maquinaria pesada, mal estado de los corrales de pesca y destrucción de un bosque subfossilizado de alerce milenario. Posteriormente se presentó una denuncia ante el Consejo de Monumentos Nacionales por la alteración de cinco corrales de pesca con maquinaria pesada en la playa Los Notros de la localidad de Lenca.

La organización de Huelmo declara haber privilegiado la judicialización e institucionalización del conflicto, mediante denuncias ante servicios públicos: SEA, Monumentos Nacionales, Contraloría. Para estas acciones han recibido apoyo y asesoría de abogados, profesores, funcionarios públicos, del propio movimiento Carretera Austral Sin Salmoneras, y de un congresista. Con este último, en julio de 2021 presentaron un recurso administrativo ante el SEA para revertir el fallo que daba luz verde a la instalación de la empresa. A mediados de agosto de 2021, el SEA objetó la solicitud de participación ciudadana elevada por la comunidad. De la reclamación administrativa, pasaron a la vía judicial; y en septiembre de 2021 ingresaron un recurso de protección, el cual fue denegado. Posteriormente, en febrero de 2022, recurrieron a la Corte Suprema, pero su apelación no fue acogida por estar fuera de plazo. Si bien ninguna de las acciones judiciales ha prosperado, consideran que es necesaria la reclamación de sus derechos, aunque estos se vean entrampados judicial y legalmente.

Y en relación con sus propios pares o vecinos, es decir, los residentes locales, recurren a diversas actividades públicas especialmente dirigidas a involucrar a la comunidad: jornadas de limpieza de playas, marchas familiares, campaña de recolección de firmas de apoyo, encuentros familiares, caravanas, cicletadas, comunicados públicos y empleo de medios tradicionales de alcance local.

Sensibilidades territoriales

Los conflictos señalados originan la circulación de mensajes, acciones y discursos, que despiertan distintas sensibilidades en el territorio. Una de estas sensibilidades es lo que podría denominarse proambiental, pero no antiempresarial. Es el caso de Codihué, donde los vecinos organizados declaran no estar en contra de las empresas, considerando los beneficios laborales que reportan para la población local; el problema surgiría cuando no respetan el medioambiente ni la normativa vigente en materia medioambiental y patrimonial.

... empezamos con esta lucha, que no es por molestar, porque como nosotros siempre hemos dicho, nosotros no estamos en contra del progreso y que la gente tenga trabajo. Todo lo contrario: yo creo que todos queremos que nuestros vecinos estén bien y tengan un buen pasar, pero con las cosas bien hechas. (FCE-AOI)

Similar apreciación está presente en la organización de Huelmo, cuyos integrantes, más que estar en contra de la empresa privada, sienten indignación por los “malos empresarios”, los que “abusan de otros”, acusando a muchas salmoneras de operar con esa lógica.

Si aquí nosotros tenemos que seguir viendo que las empresas sí pueden existir, pero tenemos que coexistir de forma armónica como vecinos, no de esta forma

tan antagónica. Aquí no puede haber buenos y malos, aquí tenemos que convivir todos, hay espacio para todos, pero no de esa forma, omitiendo informaciones... (FCE-CO1)

De este modo, dentro de su ideario, las empresas y la protección del medioambiente son elementos que se pueden compatibilizar, a condición de que la normativa ambiental se haga cumplir de manera efectiva. En este sentido, también apelan a la responsabilidad de las entidades públicas: “no consultan a las comunidades, no consultan a nadie, parece que tomaron la decisión haciendo los estudios en Santiago” (FCE-CO1). Se acusa una falta de disposición “proactiva por parte de las autoridades”, particularmente manifiesta en la falta de fiscalización, aludiéndose al respecto que “lo que nos falta justamente son autoridades comprometidas con su trabajo” (FCE-CO2).

El discurso de Carretera Austral Sin Salmoneras es más categórico en ese sentido, al acusar a las autoridades fiscalizadoras de infringir la normativa referente a la administración y control de concesiones, y de admitir ficciones legales en torno a un supuesto funcionamiento continuo de las operaciones de la empresa desde 2011, que habría impedido la caducidad de la concesión. Es así como una vocera señala que “hay una evidente falta de fiscalización por parte de todos los organismos que componen la mesa evaluadora de estos proyectos” (Alocución 2, vocera movimiento).

Con relación a la defensa del territorio, los integrantes de Carretera Austral Sin Salmoneras declaran que no claudicarán hasta que las salmoneras sean retiradas por los organismos competentes, de los cuales esperan un compromiso de gestión y fiscalización donde “el Estado debe hacerse cargo y debe intervenir a favor de las comunidades y del medioambiente” (Alocución 1, vocera movimiento).

Así, es posible observar que también hay visiones que proyectan el territorio con prescindencia absoluta de la industria salmonera, pues consideran que es un lugar para la conservación de la naturaleza, en el marco de una sensibilidad de cuidado y fomento de sus recursos, un espacio cuya vocación productiva estaría en el turismo de intereses especiales. Se transparenta así una visión polarizada, que prioriza uno de los ejes en tensión a la vez que excluye o subordina otros. En este caso, el interés de Carretera Austral Sin Salmoneras es la preservación de la biodiversidad marina y el patrimonio local (tocones de alerce, corrales de pesca, humedales), a la par de un deseo más amplio de establecer una “moratoria total” a la salmonicultura en la zona sur del país.

Nuestra idea es siempre tratar de que las personas que habitan los territorios cuiden sus territorios, sean conscientes de lo que hay, de la importancia de este y de la importancia de la biodiversidad y el cuidado de la naturaleza en general. (FCE-BO1)

Por otra parte, es común a todos los casos que las acciones de relacionamiento comunitario de las empresas despierten sensibilidades ligadas a la estabilidad laboral y el progreso asociado a la industria salmonera en la zona. En Huelmo, esto forma parte de las preocupaciones de los vecinos organizados, quienes permanecen atentos ante otros problemas del territorio que puedan afectar su vida cotidiana, como la pobreza y el desempleo. Por lo mismo, estiman que no hay una conciencia

ambiental generalizada, debido a que las personas están preocupadas de resolver sus problemas cotidianos.

Según participantes de Carretera Austral Sin Salmoneras, quienes adhieren más a esas sensibilidades prácticas de supervivencia propia son algunas organizaciones de pescadores artesanales, pero sobre todo los habitantes más antiguos y tradicionales del territorio, quienes priorizan el aspecto económico-laboral por sobre el cuidado y protección del medioambiente. Esto ha traído como consecuencia que, por ejemplo, en Lenca y Metri, la organización ha encontrado oposición indirecta de algunas organizaciones y habitantes más antiguos, lo que ha dificultado reforzar su base de apoyos y ampliar sus alcances. Para los participantes del movimiento, es normal encontrarse con personas a favor y en contra de la movilización, dado que “para los simpatizantes [de la empresa] es promesa, es trabajo, porque con esas cosas le llegan a la gente” (FCE-BOI).

Para algunos integrantes del movimiento, la posición que promueven dependerá de los dirigentes que estén a la cabeza de las organizaciones respectivas, aunque la reconocen como una postura que puede cambiar durante el desarrollo del conflicto. En todo caso, no ha existido un enfrentamiento directo entre las comunidades que están a favor y las que están en contra de la instalación de los centros salmoneros; son, más bien, tensiones latentes. Por ende, si bien aún no puedan definirse como opositores a la causa, son un público fluctuante que puede incidir en la definición identitaria del movimiento, reflexión que también circula al interior de la organización de Codihué.

En Huelmo, la situación de sensibilidades fluctuantes también se ve desde un cariz más positivo, al señalarse que la gente que llega a asentarse a la localidad está generando un cambio social, en la medida en que se preocupa más de los temas ambientales. En ese sentido, en tanto organización, esperan poder cambiar algunas de las sensibilidades territoriales y concientizar a sus vecinos sobre el daño ambiental que pueden generar algunas empresas. Así, su interés es sumar más personas y grupos a las causas que los movilizan. Por ello, en el caso de la organización de Codihué, además de centrarse en la problemática con Invermar, también buscan brindar apoyo a otras organizaciones locales (junta de vecinos, comunidades indígenas, comités de Agua Potable Rural, entre otras). Lo interesante es que, a pesar de existir visiones diferenciadas, e incluso contrapuestas, se aspira a una proyección comunitaria de largo aliento que implique a lo territorial/comunitario y sus organizaciones.

Sabemos que, en algún momento, la comunidad a la que pertenecemos va a ir viendo que es muy interesante lo que estamos haciendo y que va a ser muy bueno para todos, porque con las ideas que tenemos de trabajo, de comunidad, de ser colaborativos, de sacar adelante tantos proyectos que se pueden hacer y no se hacen porque las organizaciones que había no hacían participar. (FCE-AOI)

De este modo, diversas organizaciones ven en el conflicto una posibilidad de transformación de las sensibilidades, siempre y cuando puedan ir generando conciencia ambiental en la comunidad local.

TABLA 3 | Síntesis de dimensiones por casos

DIMENSIÓN	CASO 1: CODIHUÉ	CASO 2: LENCA Y METRI	CASO 3: HUELMO
Identificación colectiva	Antagonismo contra proyecto de piscicultura	Antagonismo contra la industria salmónica en general	Antagonismo contra proyecto de piscicultura
	Formación de una colectividad multiorganizacional de alcance local	Formación de un “movimiento” o “coordinadora” multiterritorial y multiorganizacional	Formación de una colectividad multiorganizacional de alcance local
	Objetivo relevante: impedir la instalación de la ampliación del proyecto	Objetivo relevante: desmantelamiento de la infraestructura salmónica en el territorio	Objetivo relevante: realización de proceso de participación ciudadana previo a la instalación del proyecto, de acuerdo con normativa ambiental
Modos de organización	Organización formal, con personalidad jurídica	Inicialmente liderada por una organización formal local; deriva en coordinadora multiorganizacional	Inicialmente al alero de junta de vecinos; con miras a constituir organización formal
	Composición local	Composición masiva y multiterritorial	Composición local
	Grupo de coordinación y asamblea con poder de decisión	Grupo de coordinación con atribuciones de decisión (debido a complejidad de decisión asamblearia)	Toma de decisiones distribuida entre sus miembros
Acciones colectivas	Diálogo con sector público y autoridades	Actividades sociales abiertas	Generación y difusión masiva y focalizada de información
	Actividades sociales abiertas	Actividades políticas masivas (asambleas)	Acciones judiciales
	Comunicados y declaraciones públicas	Comunicados y declaraciones públicas	Alianza con diversos facilitadores técnicos y políticos
	Generación y difusión masiva de información	Generación y difusión masiva de información	Exigencia de procesos de participación ciudadana
	Alianza con diversos facilitadores técnicos y políticos	Alianza con diversos facilitadores técnicos y políticos	
	Exigencia de procesos de participación ciudadana	Acciones judiciales	
Sensibilidades territoriales	Compatibilidad potencial entre medio ambiente y empresas	Mayor tendencia a medio ambiente versus empresas	Compatibilidad potencial entre medio ambiente y empresas, con énfasis en control institucional
	Relación entre desarrollo industrial y subsistencia familiar	Relación entre desarrollo industrial y subsistencia familiar	Relación entre desarrollo industrial y subsistencia familiar

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Discusión

Los casos analizados (Tabla 3) tienen a la salmonicultura como eje conflictivo que genera un clima de malestar compartido (Collins, 2009), incentivando la autoorganización colectiva entre vecinos que se ven directamente afectados por estas empresas.

En cada caso analizado, la acción colectiva es un elemento central que se manifiesta a través de un amplio repertorio de acciones, las cuales incluyen desde tácticas contenciosas (Tilly, 2006) hasta la difusión del conflicto (Paredes, 2013; Paredes & Cáceres, 2023). Entre las acciones desarrolladas destacan las denuncias públicas, reuniones con autoridades, manifestaciones y actividades culturales, donde se divulgan los mensajes de las organizaciones. La educación ambiental ocupa un rol clave al informar sobre el conflicto socioambiental y sensibilizar sobre el cuidado del entorno local. En un plano más confrontacional, las agrupaciones presentan denuncias administrativas y recursos judiciales, frecuentemente con apoyo técnico de actores externos. En conflictos de carácter local, también exigen consultas ciudadanas amparándose en la normativa ambiental, una respuesta ante la estrategia empresarial de fragmentar proyectos para eludir los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). A diferencia de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los EIA requieren una mayor profundidad en el análisis y permiten una participación ciudadana más efectiva.

En cuanto a los modelos organizacionales, se recurre a orgánicas ya existentes (por ejemplo, juntas de vecinos) que se refuncionalizan, o bien se crean nuevas organizaciones, formales e informales, *ad hoc* al conflicto. Emergen liderazgos, especialmente entre personas con mayores capacidades técnicas para navegar entre las normativas y los procesos administrativos y judiciales. Son recursos que se orientan, por un lado, a bloquear el accionar de las empresas en cuestión; y por otro, a continuar sumando conciencia entre la población local y apoyo externo. Es importante destacar que los nombres de estas organizaciones reflejan una fuerte identificación territorial: todos incluyen etiquetas geográficas que los identifican (como Huelmo, Codihué o Carretera Austral), lo que indica un reconocimiento del territorio en el que viven sus miembros y una valoración de su cuidado (por ejemplo, “sin salmoneras” o “en defensa”).

La iniciativa “Carretera Austral Sin Salmoneras” ilustra una red de coordinación entre organizaciones y comunidades locales, enmarcada en una lógica supraterritorial. Esta articulación exige una estructura organizativa interna que permita operar en múltiples frentes: mantener el conflicto en la agenda pública y resistir las acciones comerciales perjudiciales. Sin embargo, con el tiempo, los liderazgos se desgastan y la falta de renovación provoca un repliegue del movimiento. Además, errores de coordinación y fracasos en el ámbito judicial dificultan la continuidad, aspectos que merecen un análisis más profundo.

En este contexto, se despliega un abanico de formas organizativas que varían desde redes amplias y horizontales hasta estructuras más rígidas y centralizadas en la toma de decisiones. A pesar de esta diversidad, el componente organizacional es constante, lo que subraya su relevancia para cualquier forma de colectivización,

más allá de afinidades específicas. Así, las organizaciones se configuran de manera polimorfa, adaptándose a las circunstancias del conflicto.

Un elemento crucial en estos procesos es el uso de herramientas digitales, que facilitan tanto la comunicación interna como la difusión y convocatoria pública. Estas plataformas han desplazado en parte el rol de medios tradicionales, como la prensa escrita, cuyo impacto en estos contextos tiende a ser limitado. Desde una perspectiva metodológica, es importante reflexionar sobre el papel de estas herramientas en el análisis de movimientos colectivos emergentes.

La complementariedad entre las dimensiones organizativa y accional define la base del actor colectivo en situación de conflicto. Sin embargo, la dimensión identitaria es la que sostiene el movimiento en el tiempo, ya que no solo establece al actor organizado, sino que también delimita opositores, aliados y posibles apoyos (Melucci, 1999; Polletta & Jasper, 2001). En los casos estudiados, las identidades colectivas varían en amplitud y definición; pero, en todos ellos, la identidad permite comprender las relaciones y posiciones de los actores en el conflicto. Esta identidad compartida orienta el desarrollo del conflicto, conectando al actor organizado con una causa socioterritorial y dotándolo de una capacidad de agencia fundamental para sostener la lucha.

Finalmente, evidenciamos una dimensión diferenciada, aunque relacionada, de la capacidad colectiva de reconocerse en un nosotros y oponerse a otros, propia de lo identitario. Esa dimensión conjuga elementos ideacionales –sin necesariamente formalizar su sistema ideológico ni reducirse a la presencia de intereses grupales ya definidos– con elementos emocionales y morales que denominamos *sensibilidades territoriales*, tendientes a la producción de prácticas, significados y horizontes de acción de la vida colectiva anclada territorialmente (Scribano & D’hers, 2018), que permiten vincular la cotidianidad con el conflicto socioterritorial y su despliegue.

A partir de su carácter procesual y abierto, la dimensión identitaria le otorga dinamismo y elasticidad a la lógica identitaria, al vincularla a las formas de vida colectiva territorializadas y permitirle al actor colectivo organizado encontrar alianzas con otros. Y ello pese a que los intereses o ideas de los integrantes de ese colectivo no sean los mismos, pero sí presenten ciertas afinidades emocionales y morales basadas en el compartir entre ellos un territorio; es decir, una sensibilidad en común, más pragmática que ideológica o meramente utilitaria. Además, la dimensión identitaria permite moderar y matizar posicionamientos al interior del colectivo, encontrando posibilidades de articulación y adecuación de posiciones mediante la negociación y el diálogo. Consideramos que la sensibilidad territorial, al posicionarse entremedio de la ideología y los intereses, resaltando las emociones morales compartidas, dota de plasticidad a la identidad colectiva, mostrando tanto la importancia de su carácter procesual (Polletta & Jasper, 2001), como la impureza de su naturaleza.

Los desafíos se presentan en la capacidad de allegar y capitalizar apoyo social. Esto se dificulta debido a la alta inversión de las empresas en el despliegue comunicacional y mediático, sumado a funciones de “responsabilidad social empresarial” que les permiten granjearse la aprobación comunitaria, social y de las autoridades. Además, entre la misma población se encuentran sensibilidades divergentes en cuanto a cómo definen el impacto ambiental y social percibido como relevante o soportable,

y en cómo hacer frente de manera efectiva a dichas amenazas sin hipotecar su participación en los beneficios sociales y económicos que ofrecen las empresas. Esto último suele generar división al interior de las comunidades locales entre quienes están a favor y en contra de las empresas.

Con base en lo anterior, señalamos que ni la categoría de movimientos sociales, con su excesivo foco en una identidad colectiva organizada y los repertorios de actuación, ni la de coaliciones promotoras, que enfatiza la dinámica organizacional, dan cuenta de la dimensión referida a tipos de sensibilidad territorial que van definiendo el perfil del actor colectivo de forma procesual. Para suplir tal brecha, hemos propuesto el concepto de *modo emergente de colectivización de base territorial*, como categoría analítica de registro mesosocial que expresa la configuración de actores colectivos a partir de cierta sensibilidad colectiva sustentada en modalidades de organización, formas de acción e identificación común, que sostienen y fomentan una causa sociopolítica articulada a un imaginario social bordemarino (Retamal & Pérez, 2022). Esta categoría permite valorar el carácter procesual y dinámico de la configuración de sensibilidades tanto al interior del grupo como hacia el exterior; es decir, del conflicto mismo. Es justamente este punto lo que entrega valor analítico a la propuesta aquí presentada, porque no se limita a considerar solo las condiciones o los resultados, sino que focaliza el proceso mismo de emergencia del conflicto, resignificando de esa forma tanto la definición de las condiciones como la posibilidad de observar otros resultados en beneficio de la causa. Por ejemplo, que se fomente en el territorio una sensibilidad e inclinación hacia la protección ambiental, pero sin provocar daños a otras personas implicadas, ya sea económicos o morales, involucrando a otros actores en la búsqueda de soluciones al conflicto. Por ende, señalamos que los modos emergentes de colectivización no pueden reducirse a grupos ni asociaciones momentáneas o solo contingentes; al contrario, son expresiones de densidad político-cultural encarnadas en un actor colectivo de base territorial.

Por último, justamente por su carácter procesual, dinámico y no clausurado, la colectivización de base territorial posibilita la articulación con otros actores sociales y organizacionales de carácter local, proyectando el conflicto a otras escalas y territorios, asentando un movimiento más amplio de resistencia y protección de los territorios costeros. Consideramos que el reconocimiento de la dimensión de sensibilidad territorial puede cumplir un papel analítico, al permitir estudiar los alcances de la acción colectiva en los conflictos y establecer una relación distinta entre las acciones necesarias, posibles y efectivas, no limitadas a su alcance ideológico ni utilitario.

Conclusiones

El aumento de conflictos y manifestaciones ciudadanas vinculadas a problemáticas socioambientales costeras en Chile permite observar la conformación de novedosas formas de agrupamiento colectivo en defensa del territorio costero-marino, y contra los efectos perjudiciales de la industrialización marítima sobre las zonas costeras-marinas, principalmente asociados a la salmonicultura.

A partir de los conflictos suscitados en el seno de Reloncaví y sus alrededores, se analizaron tres casos de colectivización emergente, que no pueden reducirse a un

único principio (identidad, organización) ni factor (demanda, efectos en la política pública), debido a la complejidad de las asociaciones entre los diferentes elementos que la componen. El análisis permite reconocer una nueva dimensión denominada *sensibilidad territorial*, que se agrega a lo organizacional, lo accional y lo identitario.

Esta dimensión se relaciona con elementos ideacionales, emocionales y morales de la población, en una lógica de colectivización, permitiendo la vinculación entre actores plurales que, mediante el recurso a la acción colectiva y una narrativa en común, confluyen en una causa ambiental que los afecta directamente. De esta manera, a pesar de su definición tentativa y exploratoria, tiene potencial analítico que permitiría cierto rendimiento empírico interpretativo y, tal vez, causal.

Finalmente, en línea con lo anterior, estudiar los modos de colectivización emergente nos permite indagar en los procesos de movilización colectiva territorial más allá (o “más acá”) de sus efectos en la política pública, focalizando otros efectos que dicha colectivización tiene para la vida social en el territorio, pero sin la necesidad de dotarla de la pesada carga de ser un movimiento social.

Agradecimientos

Este artículo es producto de los resultados de los proyectos Fondecyt de Postdoctorado 3200974 y Subvención a la Instalación en la Academia 85220097, ambos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Referencias bibliográficas

- Allain, M. (2019). Conflictos y protestas socio-ambientales en Chile: reflexiones metodológicas y resultados. *Revista de Sociología*, 34(1), 81-101. <https://doi.org/10.5354/0719-529X.2019.54271>
- Álvarez, S., Dagnino, E. & Escobar, A. (2001). *Política cultural y cultura política: una nueva mirada a los movimientos sociales latinoamericanos*. Taurus.
- Arriagada, E., Garcés Sotomayor, A., Maillet, A., Viveros Barrientos, K. & Zambra, A. (2022). Lived environmental citizenship through intersectional lenses: The experience of female community leaders in rural Chile. *Journal of Rural Studies*, 94, 353-365. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.07.007>
- Bebbington, A. (2007). Elementos para una ecología política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras. En A. Bebbington (Ed.), *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales* (pp. 23-46). Instituto de Estudios Peruanos.
- Benavides-Lara, M. (2020). Coaliciones promotoras de apoyo y corrientes de políticas en la reforma educativa 2013 de México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 50(2), 137-164. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.2.71>
- Canales, M. (2006). *Metodología de investigación social. Introducción a los oficios*. LOM.

- Carrasco, S., Abad, P., Cuevas, C., Cariaga, V., Mansilla, P. & Maillet, A. (2022). De la movilización a la convención: dinámicas y estrategias de las organizaciones socioambientales en el proceso constituyente chileno. *Universum*, 37(2), 667-693. <https://doi.org/10.4067/S0718-23762022000200667>
- Cohen, J. (1985). Strategy or identity: New theoretical paradigms and contemporary social Movements. *Social Research*, 52(4), 663-716. <http://www.jstor.org/stable/40970395>
- Collins, R. (2009). *Cadenas rituales de interacción*. Anthropos.
- Cortez López, M. (2019). Resultados políticos de los conflictos socio-ambientales eléctricos en Chile. *Revista de Sociología*, 34(1), 102-121. <https://doi.org/10.5354/0719-529X.2019.54266>
- Cortez, M. & Maillet, A. (2018). Trayectoria multinivel de una coalición promotora e incidencia en la agenda política nacional. El caso del conflicto de Pascua Lama y la ley de glaciares en Chile. *Colombia Internacional*, (94), 3-25. <https://doi.org/10.7440/colombiaint94.2018.01>
- Delamaza, G. (2019). Consecuencias políticas de los conflictos socio-territoriales. Hacia una conceptualización pertinente. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, (37), 139-160. <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2019.n37-08>
- Delamaza, G., Arriagada, E. & Cortez, M. (2023). Marea y movimientos: cuando la acumulación de conflictos territoriales alcanza resultados políticos limitados. El caso de Chiloé, Chile. *Apuntes: Revista de Ciencias Sociales*, 50(93), 181-211. <http://dx.doi.org/10.21678/apuntes.93.1655>
- Fernández, M. I. (2018). Conflictos territoriales y movimientos sociales: los límites de un modelo de crecimiento sin participación. En M. A. Garretón (Coord.), *Política y movimientos sociales en Chile: antecedentes y proyecciones del estallido social de octubre 2019* (pp. 63-75). LOM.
- Flores, R. (2013). *Observados observadores: una introducción a las técnicas cualitativas de investigación social*. Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Flores-Mariscal, J. (2021). El modelo de coaliciones promotoras: puente para la integración del enfoque de políticas públicas y la sociología de los movimientos sociales. *Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales*, 5(2), 53-79.
- García, D. (2021). Los conflictos socioterritoriales y los arreglos institucionales. Posibilidades de transformación en América Latina. *Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública*, 19(37), 45-74. <https://doi.org/10.5354/0717-8980.2021.68497>
- Guajardo, M. & Gil-García, J. (2020). Coaliciones promotoras, perturbaciones externas y cambios en las políticas: Entender la intensidad de la política de control del tabaco en España, México y Uruguay. *Gestión y Política Pública*, 29(2), 477-501. <https://doi.org/10.29265/gypv29i2.781>
- Jasper, J. (2016). *Protesto: uma introdução aos movimentos sociais*. Zahar.
- Maillet, A., Allain, M., Delamaza, G., Irarrazabal, F., Rivas, R., Stamm, C. & Viveros, K. (2021). Conflicto, territorio y extractivismo en Chile. Aportes y límites de la producción académica reciente. *Revista de geografía Norte Grande*, (80), 59-80. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022021000300059>
- McCarthy, J. & Zald, M. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241.

- Melucci, A. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. El Colegio de México-Centro de Estudios Sociológicos.
- Neveu, E. (2002). *Sociología de los movimientos sociales*. Hacer.
- Paredes, J. P. (2013). Movilizarse tiene sentido: análisis cultural en el estudio de las movilizaciones sociales. *Psicoperspectivas*, 12(2), 16-27.
- Paredes, J. P. (2021). La “Plaza de la Dignidad” como escenario de protesta. La dimensión cultural en la comprensión del acontecimiento de Octubre chileno. *Revista de Humanidades de Valparaíso*, (17), 27-52. <http://dx.doi.org/10.22370/rhv2021iss17pp27-52>
- Paredes, J. P. & Cáceres, D. (2023). La sociología de los problemas públicos. *Cinta de Moebio*, (76), 37-49. <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-554x2023000100037>
- Polletta, F. & Jasper, J. (2001). Collective Identity and Social Movements. *Annual Review of Sociology*, 27, 283-305. <https://www.jstor.org/stable/2678623>
- Porto Gonçalves, W. (2001). *Geo-grafías: territorios y movimientos sociales*. Siglo XXI.
- Retamal, A. & Pérez, C. (2021). Zonas costeras en disputa: tensiones y conflictos socioterritoriales en el seno de Reloncaví, Chile. En P. López & M. Betancourt (Coords.), *Conflictos territoriales y territorialidades en disputa: re-existencias y horizontes societales frente al capital en América Latina* (pp. 287-313). CLACSO.
- Retamal, A. & Pérez, C. (2022). Imaginarios predominantes en la configuración del territorio costero-marino del seno de Reloncaví, Chile. *Pensamiento y Acción Interdisciplinaria*, 8(1), 11-33. <https://doi.org/10.29035/pai.8.1.11>
- Sabatier, P. & Jenkins-Smith, H. (1999). The advocacy coalition framework: An assessment. En P. Sabatier (Ed.), *Theories of the Policy Process* (pp. 117-166). Westview Press.
- Sabatier, P. & Weible, C. (2007). The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications. En P. Sabatier (Ed.), *Theories of the Policy Process* (pp. 189-220). Westview Press.
- Sabatier, P. & Weible, C. (2010). El marco de las coaliciones promotoras. En P. Sabatier (Ed.), *Teorías del proceso de las políticas públicas* (pp. 203-238). Jefatura de Gabinete de Ministros-Presidencia de la Nación.
- Sanjurjo, D. (2013). El cambio en las políticas de estupefacientes: el ejemplo de Uruguay. *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, (27), 291-311. <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/5957>
- Scribano, A. & D'hers, V. (2018). Presentación Dossier “Las sensibilidades sociales hoy. Sociología de los cuerpos/emociones en el sur global”. *Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, (10), 11-15.
- Svampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. CALAS.
- Tarrow, S. (2004). *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza.
- Tilly, Ch. (2006). *Regimes and repertoires*. The University of Chicago Press.
- Valles, M. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión, metodológica y práctica profesional*. Síntesis.
- Vasilachis de Gialdino, I. (2013). *Discurso científico, político, jurídico y de resistencia: análisis lingüístico e investigación cualitativa*. Gedisa.